

Estado y Mercado en el Desarrollo Económico

Por Martín Kalos¹ y Martín Ravazzani²

Abstract

En este trabajo se aborda el debate sobre el rol del Estado en el desarrollo socioeconómico, explorando su relación con el mercado, sus funciones indelegables, y las consecuencias de su ausencia o mínima intervención. Se analiza el dilema entre lo público y lo privado, destacando las limitaciones del mercado y los fallos que pueden surgir en su funcionamiento. Se examina la importancia del Estado como regulador y árbitro, así como su papel en la puja distributiva y la colaboración público-privada. Se subraya la necesidad de un Estado proactivo en la inversión de proyectos de alto riesgo y en la promoción de avances tecnológicos. Además, se discute la gestión pública y se proponen medidas para fortalecerla. Las líneas de investigación abarcan estudios comparativos, análisis de casos históricos y contemporáneos, y revisión de políticas y programas implementados en diferentes contextos. La conclusión principal que emerge es que el Estado desempeña un papel central y esencial en la coordinación del desarrollo socioeconómico, siendo necesario fortalecer su capacidad de acción y gestión para promover un crecimiento equitativo y sostenible. Se hace foco además en el caso argentino y la urgencia por coordinar políticas de desarrollo entre los sectores público y privado de nuestro país.

1. Introducción

En estos tiempos en que reaparecen opiniones muy críticas sobre el rol del Estado y que apuntan a su reducción a expresiones mínimas, resulta oportuno realizar algunas reflexiones sobre el papel del sector público en la economía a la luz de la experiencia histórica. Pondremos énfasis en el caso argentino bajo la perspectiva que, si bien el Estado fue partícipe del proceso de decadencia experimentado por la economía nacional, también debe ser protagonista de la recuperación y el desarrollo al que puede aspirar la Argentina.

En este sentido, el contexto actual argentino demuestra la urgencia por una política sostenida y sustentable de desarrollo. La economía nacional no crece desde 2011. En comparación con ese año, el producto bruto interno per cápita cayó 11% en 2023 (la pérdida del ingreso se siguió profundizando en el año 2024 en curso; el Relevamiento de Expectativas de Mercado prevé una retracción del PIB de 3,7%). La pobreza pasó de 29% a casi 45% según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, correspondiente a fines del año pasado, y ya se ubica en 55% a mediados de 2024 según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Este comportamiento se vincula en lo sustancial a la

¹ Economista. Director de EPyCA Consultores. Profesor (FCE-UBA). @martinkalos en redes sociales.

² Economista. Director de Ecolatina. Profesor (FCE-UBA).

persistencia de desequilibrios macroeconómicos, particularmente la expansión del gasto público sin contar con fuentes genuinas y sostenibles de financiamiento.

Las diferentes conducciones gubernamentales de estos años recurrieron a distintos artilugios para evitar los costos asociados al restablecimiento del equilibrio. Así, se apeló a la utilización de stocks (las reservas en divisas del Banco Central), al endeudamiento externo o a la emisión monetaria. Los desequilibrios acumulados hacia fines del año 2023 llegaron a tal magnitud que hicieron inviables estos mecanismos y no dejaron otra alternativa que algún tipo de “ajuste”, según cierto consenso entre los y las economistas.

Sin embargo, la respuesta “no está en el desmantelamiento del Estado, sino en su reconstrucción”, siguiendo a Peter Evans. Al respecto, Oscar Oszlak evalúa que “el mayor problema del Estado argentino es su deformidad más que su hipertrofia”. En su acertada explicación, los gobiernos de diferentes signos políticos “se casan con una burocracia y generan hijos institucionales, que son hijos directos durante el período de gobierno, pero nunca desaparecen del todo y entonces se van generando residuos institucionales y la burocracia termina convirtiéndose en un gran cementerio de proyectos políticos”.

2. Estado y mercado: el dilema de lo público y lo privado

Siguiendo la idea de la “deformidad” que plantea Oszlak como característica problemática del Estado argentino, reformular el tamaño del Estado es un tema; pero más fundamentalmente, mejorar la eficiencia del gasto público se presenta como una tarea central. Especial énfasis debería ponerse en los recursos humanos con un reclutamiento meritocrático muy selectivo y remuneraciones adecuadas para los funcionarios de carrera. Pero el aspecto que nos interesa abordar en particular es el referido al rol del Estado en lo que se ha dado en llamar políticas industriales, toda vez que reencontrar una senda de desarrollo sostenido es el mayor desafío que enfrenta la Argentina: en el último medio siglo fue el país que sufrió más recesiones en todo el mundo, una cada tres años en promedio.

La política industrial como articulación entre los roles públicos y privados para el desarrollo

Dani Rodrik define a las políticas industriales como aquellas políticas gubernamentales que apuntan explícitamente a la transformación de la estructura de la actividad económica en aras de algún objetivo público. El objetivo suele ser estimular la innovación, la productividad y el crecimiento económico; así como puede incluir otras cuestiones tales como promover la transición climática, mejorar el empleo, asistir a regiones rezagadas y estimular exportaciones o la sustitución de importaciones.

Mucho se ha discutido sobre la efectividad de las políticas industriales. Quienes las critican sostienen que el Estado carece de información para corregir las fallas de mercado y que la elección de ganadores lleva a prácticas de corrupción. Sin

embargo, estos argumentos son refutados por la experiencia. Rodrik recuerda que el presidente Ronald Reagan, famoso por etiquetar al gobierno como el problema y no como la solución, protegió de la competencia de las importaciones a las industrias del acero, el automóvil y las motocicletas de Estados Unidos, alentándolas a invertir en modernización tecnológica. Otro abanderado del liberalismo, Augusto Pinochet, cuando fue el primer mandatario en Chile, subsidió el sector forestal y promovió sus exportaciones. Y Margaret Thatcher cortejó activamente a los fabricantes de automóviles japoneses y promovió sus inversiones en el Reino Unido con incentivos financieros.

Más recientemente, los trabajos de Mariana Mazzucato arrojan que desarrollos notables como internet, la biotecnología o el gas de esquisto (“fracking”) son el resultado del aporte del sector público en los Estados Unidos que encaró el proceso de innovación invirtiendo en investigación básica. Según esta economista, casi todas las revoluciones tecnológicas han requerido un gran empujón por parte del Estado. Distintos estudios recientes demuestran que la política industrial se mantiene omnipresente y son las economías avanzadas las que más las utilizan con relación a los países en desarrollo (The New Economics Of Industrial Policy, Réka Juhász, Nathan Lane, Dani Rodrik, 2023).

Ben Ross Schneider sostuvo que los estudios sobre los países en desarrollo concluyen que las relaciones entre las empresas y el Estado son decisivas para explicar los patrones de desarrollo. Agrega que quienes analizaron las experiencias exitosas de los países del Este Asiático comprobaron que el desempeño de dichas naciones no se justificaba meramente por el poder del Estado o por sus buenas opciones en materia de política, sino más bien por la red de lazos entre el sector público y el sector privado. Concordantemente, Peter Evans sostiene que los casos exitosos del Este Asiático, como el de Corea del Sur, combinaron la autonomía gubernamental respecto de los grupos de interés privados con un “arraigo” en los vínculos sociales que proporcionaban “canales institucionalizados para la negociación y renegociación continua de objetivos y políticas”. Llamó a este sistema “autonomía enraizada” y advirtió que un Estado que fuera sólo autónomo “carecería tanto de fuentes de inteligencia como de la capacidad de confiar en la implementación privada descentralizada”.

A su vez, Albert Hirschman consideró que el capital disponible para la inversión no es el principal elemento faltante en los países en desarrollo, sino la capacidad empresarial, es decir la voluntad de arriesgar inversiones en actividades productivas. Por esta razón consideró que “el Estado debe ofrecer incentivos desequilibrantes para instar a los capitalistas privados a invertir y, al mismo tiempo, debe estar en condiciones de aliviar los cuellos de botella que generan desincentivos para la inversión”. Cabe agregar lo planteado por Alexander Gerschenkron en cuanto al problema de los riesgos. Según este historiador, al no existir en los países menos desarrollados instituciones que permitan distribuir los riesgos importantes en una amplia red de dueños de capital y en la medida que los capitalistas individuales no pueden ni quieren asumirlos, el Estado debe actuar como empresario sustituto.

Concepto y beneficios de la colaboración entre el Estado y el sector privado

Tal como hemos argumentado en la sección anterior, la colaboración entre el Estado y el sector privado es indispensable para el desarrollo socioeconómico de un país. No se puede construir un Estado si no se tiene en claro qué Mercado queremos; en gran parte, el poder estatal se concreta en cómo regula al Mercado. Si eso no ocurre de manera clara y efectiva, los espacios que el Estado deja vacantes los ocupan el Mercado u otros tipos de organizaciones (como la mafia) que pueden incluso terminar generando un cuestionamiento intrínseco a las formas de organización social vigentes (democracias, convivencia social). El punto clave no es solamente que sin Estado no hay Mercado posible; sino que ambos en conjunto ordenan la vida social en cada país, en el marco del sistema capitalista mundial.

Cualquier asociación público-privada implica la unión de recursos, capacidades y conocimientos del sector público y privado para alcanzar objetivos comunes de desarrollo socioeconómico. Esa sinergia habilita que ambos sectores complementen sus fortalezas y mitiguen sus debilidades, generando un impacto más significativo que el que podrían lograr de manera individual. Pero además, el peso (potencial o concreto) de cualquier Estado en la economía de su país implica que para el sector privado se trata de un socio de facto inevitable: sea a través de sistemas regulatorios y tributarios más (o menos) eficientes, progresivos y/o abarcativos; sea a través de empresas públicas que operen directamente en ciertos mercados; o a través de las negociaciones internacionales que sólo pueden darse entre Estados nacionales para garantizar el cumplimiento de exigencias fitosanitarias para la exportación, para proteger propiedades intelectuales o derechos a la propiedad privada, o de múltiples otras formas, el sector privado no puede pensar el desarrollo económico por sí mismo ni ignorar las condicionalidades que las políticas públicas le instrumentan - para bien o para mal -. Desde ya, sin sector privado, sería imposible para cualquier Estado siquiera intentar un proceso de crecimiento o desarrollo económico en el marco del actual sistema capitalista mundial. Los beneficios de la coordinación de recursos y capacidades son múltiples: pueden mejorar la eficiencia en la provisión de servicios públicos y por ende la productividad de las empresas privadas (además del bienestar general de la población), acceder a financiamiento bajo mejores términos, promover la transferencia de conocimiento y tecnología, mejorar la gobernanza y la transparencia de las acciones tanto públicas como privadas.

Una forma concreta en que se instrumenta esta coordinación es la “Asociación Público-Privada”: esto es, “un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño” (Banco Mundial, 2014³). Más allá de ser un ejemplo,

ya esta definición aporta claridad respecto de cómo ambas partes (el sector público y el privado) comparten riesgos, responsabilidades y también derechos bajo cualquier forma de colaboración: explicitar esas condiciones puede ser una de las claves para el éxito de las acciones que como sociedad se lleven adelante en pos del desarrollo.

Un primer punto usual en la colaboración público-privada es la búsqueda de mejorar la provisión de servicios públicos y/o la obra en infraestructura. Desde lo teórico suele hacerse foco en la supuesta mayor eficiencia e innovación de los actores privados para reducir costos en esos emprendimientos. Sin embargo, esa mayor eficiencia e innovación no sólo es imposible de generalizar sino que depende crucialmente de la regulación (en normativa general o en el contrato particular) que enmarque esas actividades privadas. En la práctica, en países periféricos este tipo de asociaciones público-privadas suelen depender de quién tenga efectivamente la capacidad de llevar adelante estos proyectos y/o de quién acepte asumir sus riesgos. De hecho, los Estados a menudo enfrentan restricciones presupuestarias que limitan su capacidad para financiar proyectos de gran envergadura. En teoría una asociación con el sector privado abriría las puertas a ese financiamiento adicional, aliviaría la carga fiscal y permitiría la realización de proyectos que de otra manera serían inviables. A nivel global suele citarse que en América Latina efectivamente los gobiernos nacionales recurrieron a instancias de financiamiento y ejecución privadas para desarrollar rutas, puertos y aeropuertos.

Por ejemplo, en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri se diseñaron y adjudicaron contratos de “Participación Público-Privada” (PPP). En los análisis de esos PPP, el mayor foco se ponía en “que las obras son financiadas por el sector privado, evitando de esta forma restricciones presupuestarias, sin generar deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado” y a la vez en que para el sector privado permitía “participar y estructurar proyectos que estarían fuera de escala sin la participación del sector público, donde el Estado asume ciertos riesgos o le asegura una cantidad de ingresos” (Slipczuk, 2018)⁴. Más allá de los análisis previos, efectivamente esas PPP en general no se ejecutaron y siguen al día de hoy siendo obras no concretadas; la principal razón fue el abrupto deterioro en las condiciones de acceso a financiamiento para esas empresas. Incluso algunas de esas firmas luego realizaron gestiones para obtener créditos o recursos de parte del sector público para poder ejecutarlas, en un claro desentendimiento de las supuestas responsabilidades y riesgos que cada parte debía afrontar.

Numerosas formas de asociación público-privadas apuntan en primer lugar a fomentar la inversión privada. Esto incluye las obras de infraestructura ya mencionadas, pero también otras maneras en que el Estado provee facilidades para la instalación de nuevos negocios: desde las simplificaciones burocráticas hasta las

reducciones tributarias son alicientes frecuentes para que las empresas decidan invertir o elevar su producción en el país. Para el Estado, el beneficio suele ser mayormente la generación de nuevo empleo y la mayor oferta de bienes y servicios (en el mercado doméstico y/o para exportación). Pero también bajo el marco de la colaboración público-privada debe entenderse la transferencia de conocimiento y tecnología del sector privado al público y de empresas grandes o extranjeras a PyMEs o firmas nacionales, según el caso. Empresas que se encuentren a la vanguardia de la innovación tecnológica pueden proporcionar acceso a tecnologías avanzadas y prácticas de gestión innovadoras. Cómo se regule esa transferencia tecnológica es clave para el desarrollo socioeconómico, por ejemplo porque aportará a que ese país propenda a ser una economía de enclave y bajo valor agregado o se potenciará con un sistema científico-tecnológico y de innovación productiva nacional para generar a su vez nuevos desarrollos en productos y procesos.

A la vez, la colaboración público-privada puede impulsar mejoras en la gobernanza y la transparencia en la gestión de proyectos. Las empresas privadas suelen tener sistemas de gestión más rigurosos y transparentes cuando están obligadas a rendir cuentas a sus accionistas y reguladores, como es el caso de firmas que cotizan en bolsa, operan servicios públicos y/o ocupan roles estratégicos a nivel nacional (en materia de soberanía energética, militar de telecomunicaciones, por ejemplo). No es el caso, sin embargo, de la mayor parte de las empresas, que no están obligadas a hacer públicas sus acciones, resultados o intenciones.

El Estado tiene sus propios regímenes de rendiciones de cuentas y transparencia. Argentina, por ejemplo, se rige por una ley de administración financiera que establece mecanismos tanto de auditoría interna como externa para la ejecución presupuestaria; que también se ha utilizado para auditar cuestiones por fuera del rango específico de esa ejecución, como ocurrió en algunas empresas privadas donde el Estado nacional tiene participación accionaria. En estos casos, los mayores problemas en su operatividad suelen darse por la falta de recursos para ampliar el alcance de las auditorías y por la poca coordinación y celeridad para que esa instancia de control se torne efectiva en cambios en el funcionamiento de los organismos auditados. Argentina también posee un régimen nacional de contrataciones que depende de dos decretos (Decreto 1023/2001 de Régimen de Contrataciones del Estado Nacional y Decreto 436/2000 de Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional) que sin embargo no cumple a la luz de la sociedad con brindar transparencia a esas compras y contrataciones que se hacen desde la Administración Pública Nacional. Ambos regímenes son lógicamente viables en teoría, pero en la práctica es mayor la confianza pública en el esquema de control privado. Por ende, una ampliación (que requiere de normativa pública, ya sea general o específica a cada caso) de la obligatoriedad de difundir balances y estados contables o de rendir cuentas de manera abierta sobre las iniciativas público-privadas en las cuales las empresas

participaron, podría aportar a reducir la corrupción y aumentar la confianza de la sociedad en las instituciones estatales.

En definitiva, para alcanzar y maximizar estos beneficios que la colaboración público-privada permitirían es fundamental gestionar adecuadamente los desafíos asociados, asegurando una alineación de objetivos (el sector privado busca maximizar ganancias mientras que el Estado supuestamente busca el bienestar social: la regulación debe alinear ambos objetivos de manera coherente y sustentable), una adecuada transferencia de riesgos (de manera que no recaigan en última instancia solamente sobre el sector público) y una supervisión transparente que utilice de manera inteligente los regímenes de control y auditoría públicos y privados.

El uso de la Inteligencia Artificial en el Desarrollo

En cualquier época histórica, los proyectos de desarrollo económico debieron incorporar la nueva ola de innovación tecnológica ocurriendo en esos momentos; de no hacerlo, se estaría no sólo perdiendo una oportunidad de aportar a ese proceso de desarrollo sino que además se estaría dejando esa ventaja en manos de otros países - ventajas que se traducirían luego en mayor productividad y competitividad en esas otras naciones -. En 2024, la ola innovadora puede resumirse en las múltiples aplicaciones que se desprenden de la inteligencia artificial, que potencian otras herramientas en marcha y en maduración como la Internet of Things, industria 4.0, automatización, etc.

Pero en particular, la IA es una innovación que además de contribuir a la productividad general de la economía, podría aportar a la misma concreción de esos proyectos de desarrollo.

Como primer ejemplo, la IA puede servir para identificar mejor las cadenas de valor y eslabones de esas cadenas donde la producción nacional podría ser globalmente competitiva. Incorporando grandes cantidades de información tanto sobre la situación actual de los sectores productivos del país como del resto del mundo, puede contribuir a una evaluación de cómo cada sector se inserta en una estrategia de crecimiento sustentable, inclusivo y resiliente o mediante un foco en nuevas oportunidades y cambios de tendencias que se desprendan de analizar datos en tiempo real. Siguiendo a Ricardo Hausmann, se podría utilizar la IA para identificar áreas no explotadas de competitividad económica que se deriven de las fuertes capacidades ya existentes en áreas adyacentes, aprovechando el rubros relacionados. Esto aceleraría y fortalecería la adopción de políticas micro y meso-económicas del tipo “picking the winner” en torno a la estrategia industrial y de servicios.

En segundo término, se puede usar la IA para identificar empresas extranjeras que puedan insertarse exitosamente en los eslabones donde la producción local no alcanzaría para abastecer la demanda prevista, en función de esa estrategia de desarrollo. Esto implica atraer Inversión Extranjera Directa en primer término, pero

con criterios e incentivos focalizados y proporcionados. Esto es algo que incluso antes de la expansión en el uso de la IA tenía éxito en programas como los de la REDI Cincinnati⁵, una iniciativa de desarrollo económico regional que emplea análisis predictivos para identificar empresas en crecimiento que probablemente realizarán inversiones futuras relevantes. Su modelo incorpora datos actualizados continuamente sobre fusiones y adquisiciones, actividades y declaraciones de ganancias para apuntar proactivamente a las empresas que en el futuro cercano tendrían condiciones para expandirse.

Desde ya, cualquier programa de desarrollo implica una mayor capacitación laboral. Aquí la IA puede pensarse como herramienta para detectar cambios importantes a largo plazo en el mercado laboral: trabajos que corren el riesgo de ser relegados por la automatización u otras tendencias económicas globales, pero también otras ocupaciones a las que podrían reconvertirse en función de las capacidades que ya tienen y las que pueden adquirir vía nuevas capacitaciones. En el Reino Unido, el Gobierno tiene una política activa para evaluar la evolución laboral por sector y a partir de ese análisis busca ofrecer más programas de capacitación para ocupaciones de alto ritmo de crecimiento en el corto plazo. La IA podría aportar al uso de grandes bases de datos para extraer estas conclusiones, con un nivel de desagregación mucho mayor.

De igual manera, la previsión de cambios en tendencias macroeconómicas y por ende de crisis (futuras o en curso) podría agilizarse con una IA que releve múltiples datos públicos y privados en busca de esos patrones de los ciclos económicos. La OCDE ya usa procesos de “machine learning” para examinar los datos semanales de diversos sectores productivos de 46 países, para pronosticar en base a ellos el crecimiento del PIB; utilizando variables como búsquedas online de términos clave (“desempleo”, “inversión”, “crisis”, “recesión”, etc.)

La herramienta presenta infinidad de otras oportunidades para encontrar alternativas que el análisis humano por sí solo no hubiera podido examinar (o al menos, no en el mismo plazo). Como último ejemplo, la IA puede aprovechar la cada vez mayor generación de información georreferenciada y datos espaciales para mejorar la prestación de servicios públicos, elevar la capacidad de respuesta ante desastres (climáticos, etc.) o detectar demandas y necesidades de infraestructura social y productiva que evite cuellos de botella a futuro en la oferta de bienes y servicios.

Sin embargo, como ocurre en general con cualquier tecnología, la IA no es una panacea, especialmente en el contexto de la formulación de políticas donde una decisión puede tener implicaciones amplias (graves y persistentes) en la sociedad y la economía. Por lo tanto, es imperativo que exista un entorno favorable para promover su uso responsable y garantizar que la IA sea una herramienta aplicada para intentar mejorar el bienestar humano y social.

5

<https://redicincinnati.com/using-predictive-analytics-to-drive-the-next-era-of-economic-growth-%E2%80%A8/>

En este sentido, es necesario establecer marcos de gobernanza de la IA: deben existir salvaguardias para garantizar su uso confiable, seguro y responsable, abarcando todo el ciclo de vida de un sistema de IA. Al respecto existen guías ya de la UNESCO, la OCDE, la Comisión Europea y varios países individuales que establecen principios y marcos que deben luego ser traducidos en medidas prácticas para que los usuarios puedan demostrar y desplegar su adhesión a los principios. Desde los gobiernos también se debe alentar al sector privado a desarrollar sus propios mecanismos de autorregulación (códigos de conducta, estándares voluntarios y mejores prácticas, entre otros).

A la vez, debe trabajarse para mejorar la calidad de los datos que luego sirven como insumos críticos para el análisis basado en IA. Un ecosistema digital habilitador, para que los datos puedan ser recolectados y analizados, debería implicar medidas para reducir la brecha digital y asegurar un acceso universal y asequible para la población en general. Esas medidas podrían incluir subsidios para primeras compras de equipos, trabajar con empresas proveedoras para ampliar la cobertura de la red, capacitar a la población trabajadora en ciencia de datos e IA de manera inclusiva. Esa inclusión debe ser un criterio generalizado: si las habilidades en IA se concentran en un solo grupo demográfico pueden surgir sesgos estructurales en el desarrollo de la IA y su aplicación política. Este tipo de capacitación general también aportará a construir confianza en la adopción y uso de la IA, difundiendo sus riesgos pero también las medidas tomadas para mantener el foco de la implementación de la IA en el bienestar humano y animal y en la sustentabilidad de la vida en nuestro planeta. Esta confianza incluye explicitar esas evaluaciones de riesgos y un criterio básico de que cuando una decisión respecto del uso de la IA pueda tener un impacto significativo en las personas, se incorporen más salvaguardias e intervención humana. La base lógica detrás del proceso de toma de decisiones de la IA, el grado de participación de la IA y la reversibilidad de las decisiones de la IA deben ser factores públicamente explicitados en su proceso de adopción.

En estas cuestiones, riesgos y desafíos en torno a la aplicación de la IA están implícitas numerosas posibilidades de cooperación fructífera entre el Estado y el mercado. El sector público debe ser quien emita las regulaciones pertinentes para la adopción de la IA, que en general está siendo desarrollada por el sector privado. Esas regulaciones deben basarse en criterios consensuados entre ambos. Su aplicación a pensar y ejecutar estrategias de desarrollo (coordinadas entre el sector público y el privado) y su impacto en mejoras de productividad en ambos sectores son cuestiones generales que deben trabajarse mancomunadamente, para que sean aprovechadas por la mayor parte posible de la población y en pos de un proceso de desarrollo nacional y global.

3. El Estado proactivo y esencial en la inversión de proyectos de alto riesgo y la facilitación tecnológica

Importancia de la inversión estatal en proyectos de riesgo y desarrollo tecnológico

El Estado proactivo y esencial en la inversión de proyectos de alto riesgo y la facilitación tecnológica es un punto central en el debate sobre el desarrollo económico. Chang destaca la importancia de que el Estado asuma un rol activo en la promoción de proyectos innovadores y de alto riesgo que puedan impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Esta visión coincide con la perspectiva de Mazzucatto, quien argumenta que el Estado no solo debe ser un regulador pasivo, sino un inversionista estratégico que fomente la innovación y el desarrollo tecnológico.

La productividad se define y mide como la cantidad de valor generado por cada hora de trabajo. En el largo plazo, elevar su productividad es la manera más sustentable en que un país puede mejorar su calidad de vida: empresas más productivas pagan mejores salarios y tienen mejores perspectivas de ganancia a la vez, lo cual eleva los ingresos familiares y por ende el nivel de consumo. En efecto, los países de mayores niveles de productividad son también los más prósperos.

Durante los últimos 25 años, la productividad global trepó rápidamente, en particular por el ascenso de China e India –que multiplicaron varias veces su producción en relación con las horas trabajadas–. El incremento en el volumen de capital disponible por cada persona trabajadora explicó casi el 80% de esa suba. Pero gran parte de ese aumento se dio en la primera década de este siglo, de la mano de la explosión de la conectividad en telecomunicaciones (con internet como gran herramienta); luego, ha tendido a desacelerarse, sobre todo en países desarrollados occidentales. La crisis mundial de 2008-2009 redujo la inversión y el consumo, algo que se retroalimentó con la pandemia de COVID-19 en el año 2020 para sostenerse en niveles menores a los que se esperaban con la trayectoria de los años previos.

En efecto, las crisis económicas generalmente reducen la inversión: la incertidumbre macroeconómica, menos demanda y más desigualdad son factores perjudiciales para la inversión privada. La inversión, tanto pública como privada, es crucial para el crecimiento de la productividad y de la economía en general: bien implementada a nivel nacional, implica más producción y oferta de bienes y servicios, menos inflación, mejores salarios y menor pobreza y desigualdad. A su vez, esto fomenta la inversión y la innovación empresarial, reiniciando el ciclo de crecimiento. También es menester entonces que haya una estabilidad de corto y largo plazo en los procesos económicos, retroalimentándose con una inversión creciente.

Más inversión implica más capital por persona trabajadora: desde elementos tangibles (maquinaria, infraestructura) hasta intangibles (software, posicionamiento de marca, comunicación estratégica, capacitación laboral). La dinámica global actual ya permite anticipar que los grandes cambios en la productividad en los próximos años vendrán asociados a la nueva oleada de innovación tecnológica: digitalización, inteligencia artificial e industria 4.0 sumarán producción, productividad, ganancias y sustentabilidad – en caso de que las políticas públicas sepan orientar la inversión de manera que beneficie a toda la sociedad -.

Así, el punto de partida de cualquier inversión implica de mínima la identificación por parte de las empresas de una problemática u oportunidad que puede ser resuelta con tecnologías tangibles y/o intangibles. Luego, está el desarrollo y la aplicación. La innovación demora cierto tiempo, y en el proceso se enfrenta con múltiples dificultades, por lo que las empresas deben revisar sus inversiones, resolver las problemáticas emergentes y adaptarse. Así, para que cualquier proceso de innovación sea viable, se requiere estabilidad económica, como mencionamos, pero también la existencia de una masa crítica de capital humano -es decir, trabajadores/as calificados/as-, cuya generación también depende de la estabilidad económica. Los procesos de crisis no solo generan barreras para el desarrollo de innovaciones en el corto plazo, sino también en los plazos siguientes en tanto implican la destrucción de capital, tanto físico como humano. En ese sentido, el retroceso que generan las crisis obliga a procesos de recuperación para alcanzar los niveles previos a la crisis, para luego promover la generación de mayores niveles de productividad y formación de los recursos humanos.

Por eso es clave que haya políticas públicas claras, consistentes y duraderas para fomentar la inversión privada. Esto incluye aristas tan diversas pero integradas entre sí como el acceso a financiamiento, la presión tributaria, los aspectos regulatorios, una población educada y laboralmente capacitada, un sistema científico-tecnológico que habilite la innovación productiva; pero también una perspectiva de aumento de la demanda que justifique invertir en ampliar la producción. Una mayor inversión es fundamental para el crecimiento de la productividad, pero debe fomentarse de manera que fortalezca las instituciones existentes, complejice y dinamice el entramado productivo y facilite la innovación a nivel nacional.

Ejemplos exitosos de colaboración virtuosa en proyectos de innovación y desarrollo socioeconómico

La experiencia global demuestra que, cuando se implementa correctamente, la coordinación entre el Estado y el sector privado puede ser un motor significativo para el desarrollo inclusivo y sostenible.

- Dentro de nuestra región latinoamericana, el programa Bolsa Familia en Brasil es un ejemplo de cómo la asociación público-privada puede abordar problemas sociales complejos. A través de la colaboración con el sector privado y organizaciones no gubernamentales, el Estado brasileño ha

implementado un programa de transferencia condicionada de efectivo que ha sacado a millones de personas de la pobreza extrema. Esta colaboración ha permitido no solo financiar el programa, sino también mejorar su eficiencia y alcance.

Pero también la importancia de la inversión estatal en proyectos de riesgo y desarrollo tecnológico radica en su capacidad para catalizar la creación y difusión de conocimiento, así como para generar externalidades positivas que beneficien a toda la sociedad. Ejemplos históricos y contemporáneos, como el programa espacial estadounidense de la NASA o la creación de Silicon Valley, ilustran cómo la inversión estatal puede desencadenar avances tecnológicos y estimular el crecimiento económico. En el mismo sentido, muchos de los países que hoy se consideran desarrollados invirtieron en proyectos de riesgo y desarrollo tecnológico a través de programas públicos, que resultaron luego en un impulso a la innovación y el crecimiento económico.

- Noruega usó los ingresos de sus recursos petroleros para crear en 1990 el Fondo de Pensiones del Gobierno, que invierte en una variedad de proyectos de alto riesgo y desarrollo tecnológico en todo el mundo: por ejemplo, en energía hidroeléctrica y eólica marina, impulsando el desarrollo tecnológico en estos sectores a la vez que reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (complementándolas, en años más recientes, con incentivos fiscales para vehículos eléctricos). Esta estrategia no solo ha asegurado el bienestar económico a largo plazo del país, sino que también ha permitido la colaboración con empresas privadas globales en sectores estratégicos, promoviendo la innovación y el crecimiento económico tanto a nivel nacional como internacional.
- Corea del Sur es un ejemplo paradigmático de cómo la colaboración entre el Estado y el sector privado puede impulsar el desarrollo tecnológico y económico. El gobierno surcoreano ha implementado programas como el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, que coordina esfuerzos del sector público y privado en la investigación y desarrollo (I+D). El Programa de Desarrollo de Tecnología Industrial implicó una inversión pública relevante en el desarrollo de tecnologías de vanguardia, como la electrónica, la automotriz y la tecnología de la información; en simultáneo se crearon grandes parques tecnológicos como el Parque Tecnológico de Gwangju, donde se concentran empresas, centros de investigación y universidades para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Esta política sostenida hace décadas ha resultado en la creación de conglomerados tecnológicos (chaebols) como Samsung y Hyundai, que son líderes mundiales en innovación y tecnología.

Pero esas políticas tuvieron éxito en gran parte por su articulación con medidas dirigidas a mejorar el nivel educativo e invertir en capacitación

laboral para la población de Corea del Sur. Desde la década de 1960, el gobierno surcoreano avanzó en políticas centradas en la educación universal y de alta calidad, así como en la formación técnica y vocacional; lo cual contribuyó al desarrollo de una fuerza laboral altamente capacitada. Además, el gobierno surcoreano instauró agencias como el Instituto de Investigación en Economía y Política (KIET) y la Agencia Coreana para la Promoción de la Tecnología y la Industria (KOTRA) para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico. Así como programas como el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social brindaron orientación estratégica y coordinación entre el sector público y el privado, la importancia de la inversión en capital humano y tecnológico, de una planificación a largo plazo y de una coordinación efectiva entre los diferentes actores fueron clave para el éxito en el proceso de desarrollo de Corea del Sur.

- Dinamarca ha sido pionera en el desarrollo de energía eólica, gracias a una estrecha colaboración entre el Estado y el sector privado. El gobierno danés ha implementado políticas de subsidios y apoyo financiero para empresas privadas en el sector de energías renovables. En particular, el impulso a la investigación e innovación en energía eólica (tanto en tierra como offshore), lo que ha llevado a la creación de un robusto sector eólico que no solo satisface las necesidades energéticas del país sino que también exporta tecnología y conocimiento a nivel mundial. Mediante el Programa de Innovación Tecnológica, el gobierno danés subsidió a empresas que desarrollaban tecnologías innovadoras.
- También en Europa, la Estrategia de Alta Tecnología alemana promovió la innovación y el desarrollo tecnológico en sectores clave como la industria automotriz, la salud y la energía; a la par que se destinaron fondos públicos a la investigación en energías renovables y eficiencia energética, contribuyendo al crecimiento económico y a la transición hacia una economía más sostenible.
- Análogamente, China tiene su Iniciativa "Made in China 2025", programa estatal que busca continuar transformando a China en una potencia manufacturera líder, mediante la inversión en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos. A tal fin, China utiliza fondos de inversión respaldados por el gobierno para apoyar proyectos de riesgo y desarrollo tecnológico en sectores estratégicos, como la biotecnología y la inteligencia artificial.

No obstante, la gestión de políticas públicas presenta desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la coordinación interinstitucional, la asignación eficiente de recursos y la evaluación de impacto. Hopenhayn resalta la importancia de diseñar políticas públicas que sean flexibles y adaptativas, capaces de responder a las cambiantes condiciones del entorno económico y social.

- Por ejemplo, en Brasil han sido clave programas como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado en 2007, que destinó recursos a proyectos de infraestructura en sectores clave como transporte, energía y vivienda. Aunque estos programas han enfrentado desafíos de corrupción y eficiencia, han proporcionado lecciones valiosas sobre la necesidad de una planificación estratégica y una gestión eficaz en la implementación de políticas públicas para el desarrollo; y en particular, sobre la relevancia de la inversión en infraestructura para impulsar el desarrollo económico.
- Los Países Bajos, por otro lado, hicieron foco en la sostenibilidad ambiental y la gestión del agua. Este último punto incluyó la construcción de sistemas de diques y presas para prevenir inundaciones y fomentar la agricultura sostenible. El país también apostó por promover tempranamente la adopción de tecnologías vinculadas a la energía renovable y eficiencia energética para abordar el cambio climático y reducir su dependencia de los combustibles fósiles; por ejemplo el Programa de Inversiones Sostenibles y el Acuerdo de Energía para el Crecimiento Verde.

Fortalecer la capacidad estatal de gestión de políticas de desarrollo efectivas

Para fortalecer la capacidad estatal en la implementación efectiva de políticas de desarrollo, en primer lugar es fundamental mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las agencias estatales; y fortalecer las instituciones estatales encargadas de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo, garantizando su autonomía y capacidad técnica. Chang enfatiza la importancia de contar con un Estado activo y coordinado, capaz de identificar y responder ágilmente a las necesidades del país. Mazzucatto y Hopenhagen coinciden en la necesidad de una gestión pública eficiente, que promueva la innovación y la colaboración entre el sector público, privado y académico.

Asimismo, se requiere una mayor inversión en capacitación y desarrollo de capacidades técnicas, así como la promoción de una cultura de evaluación y aprendizaje continuo en el sector público. En este sentido, Hausmann aporta la idea de diversificación productiva como elemento clave para el desarrollo económico sostenible: las políticas para el desarrollo deben enfocarse en promover la diversificación de la estructura productiva, mediante la inversión en sectores estratégicos y la atracción de inversión extranjera, teniendo en cuenta el sendero de aprendizaje que puede tener cada sociedad en función de sus habilidades y capacidades actuales. Sería por ende deseable fortalecer los vínculos entre la educación, la investigación y la producción, fomentando la creación de capacidades tecnológicas y la transferencia de conocimiento.

Para que una empresa realice una inversión se requiere estabilidad económica para que sea posible proyectar las ganancias de la inversión, y capital, tanto físico como monetario y humano. En este sentido, las empresas necesitan haber desarrollado

conocimiento para identificar la necesidad de invertir, en qué y cómo hacerlo y llevar a cabo la inversión. Una inversión incluye muchas dimensiones: financieras, de economía real, tecnologías, gerencia, legales, entre otras. Por lo tanto, requiere la aplicación de distintos tipos de capacidades, tanto duras como blandas y tanto individuales como organizacionales. Es fundamental que las empresas puedan contratar el personal con títulos de educación superior que necesiten, y a la vez que se desarrollen capacitaciones para el personal de manera continua. Esto no quiere decir que las empresas deban poseer conocimiento sobre todas esas dimensiones para realizar una inversión. Por el contrario, una cuestión importante es saber en dónde encontrar ese conocimiento externo, el cual se puede contratar en el marco de consultorías especializadas o incluso obtener a través de formaciones laborales brindadas por instituciones específicas - que en Argentina suelen ser sindicales, pero también son ofrecidas habitualmente por ONGs, empresas privadas o entes públicos -.

En este sentido, una característica que destaca a la Argentina es su sistema científico, tecnológico y de innovación (CTI). En el país existe un entramado importante de instituciones, mayormente públicas, dedicadas a la investigación básica y aplicada. Las más importantes, por su trayectoria y colaboración a la generación de conocimiento y recursos humanos especializados, son las universidades públicas, el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De esta forma, gran parte de las capacidades requeridas para llevar a cabo procesos de innovación en el sector privado están disponibles en este tipo de instituciones. No obstante, la vinculación entre ambas partes es históricamente deficiente en nuestro país. En gran parte porque no existen, ni para empresas ni para instituciones de CTI, políticas que la fomenten.

Sin duda, el conocimiento especializado es condición necesaria pero no suficiente para la realización de inversiones. Para invertir se necesita dinero que no siempre está disponible como capital propio de la firma. La disponibilidad de financiamiento para las empresas en desarrollo es elemental para generar procesos de aumento de la productividad y crecimiento económico sostenibles. Este financiamiento puede ser tanto público como privado; de hecho, ambas fuentes deberían complementarse, ya que cualquier proceso de inversión tiene diversas etapas. En las primeras etapas el capital privado es más reacio a financiar un proyecto de inversión riesgoso e innovador, dado el alto contenido de incertidumbre financiera y tecnológica, por lo que es fundamental la disponibilidad de fondos públicos. A medida que la inversión madura la incertidumbre es menor y por tanto se puede estimar la tasa de retorno, lo cual favorece el ingreso de capital privado aportando a solventar los nuevos gastos. La literatura especializada es muy concreta en ese sentido: la política pública de fomento de las inversiones a nivel de la empresa (es decir que asiste directamente a las empresas) genera efectos netamente positivos en futuras inversiones, el desarrollo de capacidades, las ventas, la productividad, el empleo y las

exportaciones de las empresas beneficiadas. Más aún, la evidencia también muestra que el efecto neto del resultado fiscal (subsidio vs. recaudación vinculada con la inversión) suele ser favorable. Esto también abona a la teoría de Mazzucato sobre el rol del Estado en la innovación y la inversión privada.

Además, se sugiere la creación de mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas para garantizar la transparencia y la legitimidad de las políticas públicas.

Finalmente, promover la inversión en infraestructura física y tecnológica facilita el acceso a servicios básicos y estimula la conectividad interna y externa del país. En este sentido, Chang destaca la importancia de la inversión en infraestructura como motor del desarrollo económico, mientras que Mazzucatto subraya la necesidad de una planificación estratégica y a largo plazo por parte del Estado.

4. Conclusiones

Argentina 2024 y las oportunidades para implementar políticas industriales

La economía argentina presenta importantes falencias a la hora de proyectar inversiones a largo plazo, como sus antecedentes en materia de inestabilidad macroeconómica, la falta de infraestructura o el escaso desarrollo del mercado de capitales. Pero también ofrece numerosos atractivos como su amplia dotación de recursos naturales, la alta calidad de sus recursos humanos (que se evidencian en las empresas “unicornios” y multinacionales surgidas en nuestro sistema de innovación y negocios) o su ubicación geográfica (aunque lejana a los principales centros de consumo global, Argentina no se encuentra en zonas de conflictos o desastres naturales). Otro dato para tener en cuenta son los capitales de los propios argentinos que se encuentran en el exterior y que podrían regresar al país, si se dieran condiciones favorables. Se estima que el sector privado dispone de 214.000 millones de dólares (66.000 millones de dólares más que la deuda pública).

En ese sentido, el recientemente sancionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) - más allá de varios aspectos discutibles al respecto – constituye un instrumento significativo para alentar la corriente inversora que se requiere para explotar los recursos naturales del país. En esencia, el RIGI ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones.

Además de sus recursos en materia agropecuaria, Argentina está en condiciones de dar un salto en la producción energética y minera. Vaca Muerta es el segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto en petróleo no convencional. Según estimaciones de YPF, el país podría convertirse en el quinto exportador mundial de GNL llegando a vender hidrocarburos al exterior por US \$30 mil millones en 2031. Además, existen ocho megaproyectos de cobre que podrían llevar al país a ser el quinto productor mundial. Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo por sus

reservas en litio y cuenta con dos de las mayores treinta minas de explotación de oro (Veladero y Cerro Negro). Las exportaciones mineras se podrían multiplicar por cuatro hacia 2030 ubicándose en torno de los US \$38.000 millones (proyecciones del Fondo Monetario Internacional). Estos son sólo dos ejemplos, ambos referidos a producciones primarias y que en principio se insertan en los primeros eslabones de las cadenas globales de valor correspondientes (extracción y primeros procesamiento de las materias primas), de menor valor agregado que otros eslabones y por fuera de los eslabones núcleo de cada una de esas cadenas. Sin embargo, pueden servir como puntapié para un proceso de desarrollo, si se utilizan, planifican y ejecutan adecuadamente.

En efecto, una buena parte de los desajustes de la economía argentina se explica por lo que ha dado en llamarse el “estrangulamiento externo”. Es decir, la incapacidad de generar suficientes divisas como para sostener un proceso de desarrollo. Sectores como la minería, la energía o la industria de conocimiento perfilan la posibilidad de romper con esta limitación, pero difícilmente puedan lograrlo sin una adecuada articulación público – privada.

Tal como hemos analizado en las secciones previas, esto implica una amplia gama de cuestiones a articular: desde las regulaciones que se apliquen sobre el uso de la Inteligencia Artificial hasta la actualización del Régimen de Compras y Contrataciones del Estado Nacional, pasando por una mejor integración del ejemplar sistema científico, tecnológico y de innovación argentino con la política de desarrollo productivo a largo plazo. Pero ante todo, requiere consensuar un rumbo claro para la política de desarrollo, que se sostenga ante cambios de signo partidario en el Gobierno Nacional e incorpore mejoras en el tiempo.

Sobre el rol del mercado y el Estado en el desarrollo

El Estado y el mercado son dos pilares fundamentales en la organización de cualquier economía. El Estado puede ser un "emprendedor" que no sólo corrige fallos del mercado, sino que también dirige y financia inversiones en áreas estratégicas para fomentar la innovación y el crecimiento económico (Mazzucato, 2013). El mercado, por otro lado, es un sistema económico en el cual los bienes y servicios se intercambian libremente entre los productores y consumidores mediante mecanismos de precios determinados por la oferta y la demanda. Este sistema permite la asignación eficiente de recursos, fomenta la competencia y estimula la innovación. Sin embargo, tanto el Estado como el mercado tienen características y limitaciones inherentes que determinan su rol en el desarrollo económico y social. Más aún: para cualquier sociedad, definir los alcances y límites que quiere dar a su Estado implica también determinar los límites y alcances que tendrá el mercado. Ambas instituciones deben complementarse y coordinarse. No hacerlo significa dejar espacios libres para el surgimiento de otras instituciones, en principio indeseables o subóptimas para el desarrollo socioeconómico: por ejemplo, organizaciones criminales que tomen tareas propias del Estado en zonas que éste

no controla efectivamente - sobre lo cual lamentablemente abundan ejemplos en nuestros países en desarrollo -.

El debate sobre el rol óptimo del Estado y el mercado en el desarrollo ha sido una cuestión central en la teoría económica. Ha-Joon Chang sostiene que el Estado debe jugar un papel activo y estratégico en la economía, no sólo corrigiendo fallos del mercado sino también promoviendo sectores industriales clave para el desarrollo a largo plazo (Chang, 2002). Por otro lado, autores como Dani Rodrik abogan por una complementariedad entre ambos actores, donde el mercado opera eficientemente dentro de un marco regulatorio establecido por el Estado que asegura estabilidad, equidad y sostenibilidad (Rodrik, 2007). En esta visión, el Estado debe proporcionar bienes públicos, infraestructura y un entorno regulatorio que fomente la inversión y la innovación, mientras que el mercado se encarga de la asignación de recursos y la producción de bienes y servicios de manera eficiente.

Pero a la vez, existen ciertas funciones esenciales que sólo el Estado puede cumplir de manera efectiva para asegurar el desarrollo socioeconómico. Peter Evans argumenta que el Estado debe ser capaz de implementar políticas industriales que promuevan la competitividad y la diversificación económica (Evans, 1995). Un ejemplo histórico es el caso de Corea del Sur, donde el gobierno jugó un papel crucial en dirigir la inversión hacia sectores estratégicos como la electrónica y la automoción durante las décadas de 1960 y 1970. En la contemporaneidad, países como Noruega han demostrado la importancia de la intervención estatal en la gestión de recursos naturales, utilizando los ingresos del petróleo para crear un fondo soberano que asegura estabilidad económica a largo plazo y financia proyectos de desarrollo sostenible. Estas intervenciones ilustran la necesidad de un Estado fuerte y capaz que pueda implementar políticas de largo plazo que el mercado, por sí solo, no está en condiciones de ejecutar.

El mercado tiene un rol crucial en el desarrollo económico al permitir la asignación eficiente de recursos y fomentar la innovación a través de la competencia. Sin embargo, el mercado también presenta limitaciones significativas. Ricardo Hausmann señala que los fallos del mercado, como las externalidades, la asimetría de información y la falta de coordinación, pueden impedir el desarrollo óptimo de una economía (Hausmann, 2008). Un ejemplo claro es el problema de la contaminación, donde los costos sociales y ambientales no son reflejados en el precio de los productos, llevando a una sobreproducción de bienes contaminantes. Asimismo, la concentración de mercado y el poder monopólico pueden reducir la competencia y la innovación, impactando negativamente en la sociedad.

Simultáneamente, el Estado tiene un papel fundamental en la redistribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad. Dani Rodrik subraya que las políticas de redistribución, como los impuestos progresivos y las transferencias sociales, son esenciales para mantener la cohesión social y asegurar que los beneficios del crecimiento económico sean compartidos equitativamente (Rodrik, 2011).

Instrumentos como el gasto público en educación, salud y seguridad social no sólo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también fortalecen el capital humano y promueven el crecimiento económico a largo plazo. La experiencia de los países nórdicos, donde el Estado juega un rol activo en la redistribución de la riqueza, muestra cómo políticas de bienestar social robustas pueden coexistir con economías dinámicas y competitivas.

En definitiva: la relación entre el Estado y el mercado es compleja y debe ser vista como complementaria en vez de competitiva. El Estado puede ser un catalizador de la innovación y el desarrollo, actuando no sólo como regulador, sino también como inversor estratégico en sectores clave. La interacción eficaz entre el Estado y el mercado puede crear un entorno en el que las políticas públicas y las fuerzas del mercado se refuercen mutuamente, promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo.

En vista de las lecciones aprendidas de las experiencias históricas y contemporáneas de diversas economías desarrolladas y en desarrollo, es crucial que reforcemos la presencia y efectividad del Estado en la promoción del desarrollo integral. El Estado debe asumir un rol proactivo no sólo como regulador, sino también como impulsor estratégico de la innovación y el crecimiento económico. La intervención estatal en áreas clave, como la inversión en tecnología y la industrialización, es fundamental para el desarrollo socioeconómico sustentable. Por lo tanto, es imperativo que los gobiernos actúen como catalizadores de cambio, invirtiendo en sectores estratégicos y fomentando un entorno que facilite la colaboración público-privada.

Para fortalecer la capacidad estatal en la implementación de políticas de desarrollo, es esencial establecer marcos de gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y mejorar los ecosistemas digitales. La IA, como herramienta emergente, tiene el potencial de transformar la formulación de políticas públicas mediante el análisis de grandes volúmenes de datos y la automatización de tareas complejas. Sin embargo, su implementación debe ser acompañada de principios éticos y mecanismos de regulación adecuados. Además, mejorar los ecosistemas digitales mediante la universalización del acceso a internet y la capacitación en habilidades digitales asegurará que todas las capas de la sociedad puedan beneficiarse de los avances tecnológicos, fomentando así un desarrollo más equitativo y sostenible.

Finalmente, es fundamental que los gobiernos promuevan la colaboración y las alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como regional. La adopción de un enfoque de todo el gobierno, incluyendo la creación de grupos de trabajo interinstitucionales y la participación del sector privado y académico, puede potenciar la capacidad del Estado para abordar desafíos complejos y multifacéticos. En todos estos ámbitos, es esencial que el Estado y el mercado trabajen juntos para

superar los desafíos del desarrollo contemporáneo, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica.

5. Referencias Bibliográficas

Banco Mundial (2014) Asociaciones Público Privadas Guia de Referencia

Chang, H.-J. (2003). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press.

Evans, Peter (1996) El Estado como problema y como solución, Desarrollo Económico, Vol.35, N° 140

Hausmann, R., Rodrik, D., & Velasco, A. (2008). Growth Diagnostics. In J. Stiglitz, N. Stern (Eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance (pp. 324-355). Oxford University Press.

Juhász,Réka, Lane, Nathan y Rodrik, Dani (2023) The New Economics Of Industrial Policy, Annual Review of Economics

Mazzucato Mariana, (2015) El Estado emprendedor; Taurus, Barcelona

Oszlak, Oscar y Gantman, Ernesto (2007), La agenda estatal y sus tensiones: Gobernabilidad, desarrollo y equidad, Iberoamericana Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, vol. XXXVII,pp 79-110

REDI Cincinnati (2019) Using Predictive Analytics to Drive the Next Era of Economic Growth

Schneider, Ben Ross (1999), Las relaciones entre el Estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una revisión de la literatura reciente, Desarrollo Económico, vol. 39 N° 153

6. Referencias autores

RAVAZZANI, Martín Victorio

Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad del Salvador (1975). Posgrado en Desarrollo Directivo, Instituto de Altos Estudios Empresariales, Universidad Austral (1989).

Profesor Titular de la materia Estado y Desarrollo en la Maestría en Administración y Gestión Gubernamental, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Consultor económico.

KALOS, Martín

Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (2009).
Especialista en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (2013).

Profesor Titular de la materia Estado y Desarrollo en la Maestría en Administración y Gestión Gubernamental, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Consultor económico. Director de EPyCA Consultores.